

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2023

Honorable

**TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL** (Reparto)

Bogotá D.C.

**IVÁN FRANCISCO FUENTES PEÑALOZA**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 1136883859, y portador de la T.P. No. 294147 del CSJ., con correo electrónico para efecto de notificaciones judiciales [ivanfuentesp@hotmail.com](mailto:ivanfuentesp@hotmail.com), apoderado del señor **RAFAEL RAMÓN SOTO FUENTES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1797160, residenciado y domiciliado en el municipio La Jagua del Pilar, La Guajira, y correo electrónico para efectos de notificaciones judiciales [rafaramonsofu@hotmail.com](mailto:rafaramonsofu@hotmail.com), presento ante el despacho a su digno cargo **ACCIÓN DE TUTELA** en contra del **ACCIÓN DE TUTELA** en contra del **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, en cabeza del presidente ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ, o quien haga sus veces, y de **LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, representada por ALEXANDER VEGA ROCHA, o quien haga sus veces, y el doctor ROBERTO CADAVID, Director General de la **DIRECCIÓN DE GESTIÓN ELECTORAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, o quien haga sus veces, para la protección de los derechos fundamentales del **DEBIDO PROCESO**, y **SENTENCIA EFECTIVA**, en condición de quejoso ante el CNE, por cuanto no se ha dado cumplimiento en su integridad a lo ordenado en la Resolución No. 4867 de 2019.

### **PARTES Y NOTIFICACIONES**

**ACCIONANTE:** **RAFAEL RAMÓN SOTO FUENTES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1797160, residenciado y domiciliado en Calle 2 No.2-40 esquina, plaza tranquilidad, en el municipio La Jagua del Pilar, La Guajira, y correo electrónico para efectos de notificaciones judiciales [rafaramonsofu@hotmail.com](mailto:rafaramonsofu@hotmail.com)

Apoderado: **IVÁN FRANCISCO FUENTES PEÑALOZA**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 1136883859, y portador de la T.P. No. 294147 del CSJ., con correo electrónico para efecto de notificaciones judiciales [ivanfuentesp@hotmail.com](mailto:ivanfuentesp@hotmail.com)

### **ACCIONADOS:**

**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, en cabeza del presidente ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ, o quien haga sus veces, con dirección en la Avenida Calle 26 No. 51-50 Edificio Organización Electoral CAN en la ciudad de Bogotá, y dirección para notificaciones judiciales por medio de correo electrónico [cnenotificaciones@cne.gov.co](mailto:cnenotificaciones@cne.gov.co)

**LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, representada por **ALEXANDER VEGA ROCHA**, o quien haga sus veces, y el doctor ROBERTO CADAVID, Director General de la **DIRECCIÓN DE GESTIÓN ELECTORAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, ubicadas en la Av. Calle 26 n.º 51-50, CAN, oficina 306, de la ciudad de Bogotá, y dirección de notificaciones judiciales [notificaciontutelas@registraduria.gov.co](mailto:notificaciontutelas@registraduria.gov.co).

## LOS HECHOS

1. Mi mandante, el señor **RAFAEL RAMÓN SOTO FUENTES**, identificado anteriormente, residente en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, presentó queja ante el Consejo Nacional Electoral, para que se **investigara la existencia de trashumancia histórica en el municipio La Jagua del Pilar, desde la vigencia 1998** o, lo que es mejor, se investigara la trashumancia histórica electoral, el cual fue resuelto mediante Resolución 4867 de 2019.
2. Mediante esta Resolución No. 4867 de 2019, el Consejo Nacional Electoral, luego de acumular varias investigaciones, adoptó las decisiones con ocasión del procedimiento breve y sumario adelantado para investigar la trashumancia histórica o inscripción irregular de cédulas en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva del Departamento de La Guajira.
3. Surtido el trámite de rigor dentro del referido proceso breve y sumario, el Consejo Nacional Electoral, mediante esta Resolución No. 4867 de 2019, tantas veces anotada, dejó sin efectos la inscripción histórica de cédulas de ciudadanos que no reúnen las condiciones de residencia electoral para participar en las votaciones populares, en consecuencia y frente a una posible injerencia de ciudadanos no habilitados para ejercer el derecho al voto en una determinada circunscripción que para el caso que nos ocupa, nos referimos al municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, con el fin de cumplir no solo con el mandato constitucional de garantizar la participación ciudadana legítima para la toma de decisiones, sino para garantizar la eficiencia del voto como manifestación libre y espontánea del poder ciudadano, **anulando 2.174 cédulas inscritas irregularmente** para ejercer el derecho al voto en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, a fin de combator de esta manera la trashumancia electoral, y en la procura de garantizar la genuina expresión de la voluntad popular de los asociados, dice la referida Resolución.
4. El Consejo Nacional Electoral dispuso expresamente mediante la Resolución No. 4867 de 2019, lo que a la letra sigue:

*“... ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la inscripción de las cédulas realizadas en los municipios de (...) La Jagua del Pilar (...) del Departamento de La Guajira, para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019, como consecuencia de haberse desvirtuado la residencia electoral, en los ciudadanos que se relacionan en el anexo número 2 el cual se puede verificar en el CD con el Hash Anexo\_02\_LA GUAJIRA BE5F96C3 de la presente Resolución y que hace parte integral de la misma, conforme a las razones consignadas en la parte motiva del presente proveído.*

*(...)*

*ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente Resolución y sus anexos, al Registrador Nacional Delegado en lo Electoral, a la Dirección de Censo Electoral, a la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Delegación Departamental de La GUAJIRA, para los efectos a que haya lugar en su cumplimiento...”*

5. Que el CD con el Hash *Anexo\_02\_LA GUAJIRA BE5F96C3*, contiene la relación de 2.174 cédulas inscritas irregularmente en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, cuya inscripción fue dejada sin efecto mediante por el CNE mediante lo dispuesto en la Resolución 4867 de 2019, anexa al escrito de tutela, a cual me remito para no hacerme más extensivo y repetitivo.
6. En contra de esta Resolución No. 4867 de 2019 que ordenó la anulación de 2.174 cédulas inscritas irregularmente en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, fueron presentados tan solo 37 recursos de reposición, que fueron resueltos por medio de la Resolución 6049 de 2019, **quedando incólume la anulación de 2.137 cédulas inscritas irregularmente por trashumancia histórica, decisión ejecutoriada;**
7. De estas 2.137 cédulas que el CNE declaró inscritas irregularmente por trashumancia electoral, al probarse que no eran residentes en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, y que cuya inscripción irregular dejó sin efectos solo fueron efectivamente anuladas por la Registraduría del Estado Civil un total de 1.182, y el resto, esto es **955, siguen en el censo electoral de manera irregular las cuales no han sido eliminadas del censo electoral del municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira.**
8. Estas 955 inscripciones irregulares de cédulas anuladas del censo electoral del municipio La Jagua del Pilar, La Guajira, o cuya inscripción fue anulada, mantienen de manera irregularmente su condición de votantes en dicha municipalidad dado que la Registraduría Nacional del Estado Civil no dio cabal cumplimiento a la orden dispuesta mediante Resolución 4867 de 2019, por el Consejo Nacional Electoral, las cuales se adjuntan en PDF, obtenidas del **anexo\_ 2LA GUAJIRA** adjunto, que además se encuentran relacionadas en el anexo 1 que acompaña el derecho de petición allegado a la Registraduría, al que me remito para no hacerme más extensiva y repetitiva, y que reposa en este expediente, el cual ha sido allegado como prueba.
9. Atendiendo que he verificado que estas 955 cédulas siguen inscritas en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, fue presentado un derecho de petición dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con Radicado No. RNEC-E-2023-026906, por medio del cual se ha requerido para que se le dé cabal cumplimiento y aplicación a la Resolución 4867 de 18 de septiembre de 2019 del CNE, ejecutoriada, dado que con el actuar negligente estas entidades contravienen uno de los mandatos de la Constitución Nacional, se viola el derecho al debido proceso y la sentencia efectiva, también aplicable para las actuaciones administrativas.
10. Es dable indicar que el derecho a elegir no es de carácter absoluto, en ese orden de ideas, debe tenerse presente el principio de la capacidad electoral, el cual presupone que todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que le limite su derecho.

A este respecto, se ha referido el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, del 13 de septiembre de 2012, cuando a la letra dijo:

***“... El artículo 40 Constitucional consagra el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y establece, entre otras cosas, que por regla general todas las personas tienen derecho a elegir y ser elegidas. Es decir, regula con carácter general que las personas naturales***

*gozan del poder de entronizar a los candidatos de su preferencia en el poder político, mediante el ejercicio del derecho al voto; e igualmente que tanto las personas naturales como las personas jurídicas -partidos o movimientos políticos-, cuentan con el derecho de ser elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, para sólo hablar de esta categoría de cargos. **Pese a que corresponde a un derecho fundamental, en cuya plena realización está comprometido el Estado (Art. 2º C.P.), es claro que, como la generalidad de los derechos, éste también puede ser objeto de limitaciones o restricciones...***<sup>1</sup>

11. En este caso, se encuentra probado que los más de 955 cédulas anuladas del censo electoral del municipio de La Jagua del Pilar, mediante Resolución No. 4867 de 2019, que se relacionan en anexo adjunto, fueron inscritas de manera irregular, y por ende, de mantenerse tales inscripciones irregulares, se afectan las elecciones de las autoridades locales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre de 2023 en la citada municipalidad de La Jagua del Pilar, La Guajira, atendiendo la injerencia en las elecciones populares de estos ciudadanos no habilitados para ejercer el derecho al voto en el municipio, puesto que a pesar de la decisión del CNE, no se ha garantizado en su integridad el mandato constitucional para la participación ciudadana legítima en la toma de decisiones, ni la eficiencia del voto como manifestación libre y espontánea del poder ciudadano, así como tampoco se ha garantizado la genuina expresión de la voluntad popular de la comunidad Jagüera.
12. En este sentido se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-048 de 2019, cuando señaló que es deber y obligación de las autoridades cumplir oportunamente las decisiones ejecutoriadas de las autoridades judiciales, como garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, lo cual, en igual medida, sin lugar a duda, también aplica para las decisiones proferidas por las autoridades en sede administrativa, de obligatorio cumplimiento.
13. En el presente caso se demanda una obligación de hacer, esto es, de anular las inscripciones de las 955 cédulas detalladas en el anexo 2\_LA GUAJIRA anexo, del censo electoral del municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, en virtud de lo ordenado mediante Resolución No. 4867 de 2019 por el CNE, esto es, las 2.137 cédulas registradas en dicho anexo, y no unas cuantas de estas.
14. Inminente es el perjuicio que se causaría en los comisionados de la municipalidad al permitir que personas ajenas a ella elijan autoridad local en las elecciones para ocupar el cargo de alcalde a llevarse a cabo el 29 de octubre próximo, puesto que estarían infiriendo en tal determinación personas ajenas a la comunidad debido a la trashumancia electoral, más que probada dentro del anotado proceso que llevó a cabo el Consejo Nacional Electoral que se dio por finalizado con la medida tomada por dicha Corporación mediante la Resolución 4867 de 2019, la cual dejó sin efectos la inscripción irregular de las cédulas tantas veces detalladas, luego es inminente que existe un *riesgo cierto para los derechos fundamentales de los candidatos a las elecciones a autoridades locales, a quienes les asiste el derecho de ser elegidos únicamente por los ciudadanos residentes en el territorio al que aspiran a ocupar el cargo de elección popular, como para la ciudadanía en general, y para el suscrito que estando zonificado en dicho*

---

municipio, en razón a la inscripción de estas cédulas objeto de anulación, la voluntad de los asociados no se verá reflejada, lo que se traduce en un posible acaecimiento de un perjuicio irremediable, en la violación del debido proceso, y del cumplimiento de una sentencia efectiva, también aplicable a actuaciones por autoridades en procesos administrativos, por lo tanto se cumple con el requisito de la inmediatez, la subsidiaridad, e inminencia del riesgo o perjuicio, y se hace necesario la protección de ese bien superior.

15. En Sentencia T-048 de 2019, la Corte dijo que “... La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que el debido proceso y la garantía del derecho a la jurisdicción, comprende los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener soluciones y decisiones motivadas en un plazo razonable, a que estas puedan ser impugnadas ante las autoridades de jerarquía superior, y **al cumplimiento efectivo de lo decidido en el fallo...**” (Subrayas y negrillas, mías)

Seguido, dijo la Honorable Corte que

“... La Sala Primera de Revisión en la [sentencia T-371 de 2016](#), explicó que **la ejecución de las sentencias** se traduce en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución, y que **el incumplimiento de esa garantía constituye un grave atentado al Estado de derecho**. Al analizar esta garantía en relación con los principios constitucionales de celeridad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso, como presupuestos de la función judicial y administrativa, es posible hablar del **cumplimiento de las providencias judiciales, como una faceta del núcleo esencial del debido proceso** (Preámbulo y artículos 1, 2, 6, 29 y 86 de la Constitución).

En la misma decisión, la Corte explicó que el derecho a una tutela judicial efectiva implica la **existencia de un plazo razonable en el cumplimiento de las decisiones judiciales, para resolver y ejecutar lo resuelto**. Esta razonabilidad que en principio es establecida por el legislador busca hacer efectivos los derechos o intereses de las personas reconocidos o declarados en una sentencia con base en la obligación correlativa de la administración de cumplir las providencias judiciales. De manera que, **cuando una autoridad demandada “se rehúsa o se abstiene de ejecutar lo dispuesto en una providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos fundamentales que a través de esa última se han reconocido a quien invocó la protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada, violándose por esta vía el ordenamiento jurídico superior”**. Lo anterior, comoquiera que “la misión de los jueces de administrar justicia mediante sentencias con carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta de estricta diligencia en el cumplimiento de las mismas, con el fin de mantener vigente el Estado de Derecho, actuar en concordancia con sus fines esenciales e inculcar en la población una conciencia institucional de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico.”

Finalmente, la sentencia en comentario señaló que el cumplimiento expreso de las sentencias judiciales por parte de las autoridades encargadas de su ejecución, implica además, el mandato de proceder a su acatamiento conforme lo ordenado en la parte resolutive de ellas, como parte del contenido propio de los principios de

buena fe ([artículo 83](#) de la [Constitución](#)), racionalidad de la actuación administrativa y seguridad jurídica.

16. Por otra parte, debe considerarse que, en respuesta mediante comunicado RNEC-S-2023-0020124, la Registraduría Nacional del Estado Civil respondió que,

- SE APLICO TRASHUMANCIA -QUEDO EN EL MISMO LUGAR POR QUE NO TENIA LUGAR ANTERIOR-LA JAGUA DEL PILAR (621 cédulas)
- SE APLICO TRASHUMANCIA EN LA JAGUA DEL PILAR -QUEDO EN EL LUGAR INMEDIATAMENTE ANTERIOR - LA JAGUA DEL PILAR (142 cédulas)
- SE APLICO TRASHUMANCIA EN OTRO MUNICIPIO -INSCRIPCIÓN EN UN MUNICIPIO DIFERENTE-QUEDO EN EL CENSO DE LA JAGUA DEL PILAR (4 cédulas)
- MIEMBRO FFMM (1 cédula)
- INGRESO POR INSCRIPCIÓN 2022-QUEDO INCORPORADA EN EL CENSO DE LA JAGUA DEL PILAR (153 cédulas)

17. Absurdas son todas estas consideraciones señaladas en el punto anterior, que ha manifestado la Registraduría Nacional del Estado Civil en atención de lo resuelto mediante Resolución 4867 del CNE, que ha sido claro al ordenar:

***“DEJAR SIN EFECTO la inscripción de las cédulas realizadas en los municipios de (...) La Jagua del Pilar (...) del Departamento de La Guajira, para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019, como consecuencia de haberse desvirtuado la residencia electoral, en los ciudadanos que se relacionan en el anexo número 2 el cual se puede verificar en el CD con el Hash Anexo\_02\_LA GUAJIRA BE5F96C3 de la presente Resolución y que hace parte íntegra de la misma, conforme a las razones consignadas en la parte motiva del presente proveído”.***  
(Negritas y subrayas mías).

18. En ningún aparte la orden del despacho del CNE se sujeta el cumplimiento de la decisión a la inscripción de la cédula en fecha anterior en lugar diferente, pues dicha inscripción en lugar diferente no fue objeto de estudio siguiera, además en el respectivo expediente del CNE quedó probado que dichas personas residen en lugar diferente a La Jagua del Pilar, por lo que quedó ampliamente probada la trashumancia electoral, luego es en este lugar donde debería la Registraduría Nacional del Estado Civil inscribir dichas cédulas, y no en un lugar anterior de inscripción pues se podría estar incurriendo de igual forma en trashumancia electoral por este hecho, toda vez que el lugar de censo anterior, necesariamente no coincide con el lugar de residencia, que fue lo constatado por el CNE, en acato al mandato constitucional del artículo 316, que dice:

***“... ARTÍCULO 316. En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio...”*** (Negritas fuera de texto).

Al respecto la Resolución 4867 de 2019, dice textualmente en el acápite de consideraciones:

“... La Constitución Política de Colombia en su artículo 316 establece que en los procesos electorales para la escogencia de las autoridades del orden local, solo pueden participar aquellos ciudadanos que residan en los respectivos Municipios del Departamento de La Guajira, lo que deriva en que cuando se inscriben en el censo electoral, los ciudadanos que no tienen vinculo material con los mismos, vulneran el precepto Superior, dicho en otras palabras, el propósito del Constituyente fue garantizar que en las elecciones locales solo participen personas que tengan un interés directo, es decir, que tengan un verdadero arraigo o sentido de pertenencia con el municipio en el que se inscribieron...”.

19. Así las cosas, no se cumple con la norma constitucional, si en lugar de inscribir dichas cédulas en el lugar de residencia, las inscriben sin un mayor criterio, simplemente en el lugar de inscripción de la cédula anterior, pues estaríamos bajo los mismos criterios de la trashumancia electoral o trasteo de votos, ampliamente prohibida por la constitución y las leyes, la cual responde a una actividad organizada, masiva y sistemática, cuyo objetivo principal es, precisamente, favorecer indebidamente algunos intereses y propuestas políticas, afectando y distorsionando la genuina expresión de la voluntad popular de una comunidad, en el presente asunto, de La Jagua del Pilar, La Guajira; de allí que es necesaria la intervención de esta Corporación con el fin de que se cumpla no sólo el mandato Constitucional de garantizar la participación ciudadana legitimada para la toma de decisiones, sino para garantizar la eficacia del voto como manifestación libre y espontánea del poder ciudadano, a contrario sensu, se estaría violando el derecho del Debido Proceso, la administración de Justicia, y la Sentencia efectiva al darle un viso de legalidad a la inscripción de estas cédulas que está más que probado, han sido inscritas en el municipio de La Jagua del Pilar de manera irregular, por trashumancia electoral.
20. Aunado con lo anterior, es bien sabido que, los ciudadanos pueden ejercer el derecho al voto en el lugar de residencia, y que “esta viene definida por el legislador en el artículo **316 de la Constitución Política** y los artículos 183 de la Ley 136 de 1994 y 4° de la Ley 163 de 1994, de donde se infiere que la residencia electoral es aquella "en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral, de manera que con la inscripción de la cédula bajo la gravedad de juramento manifiesta que reside en el municipio" y que la definición de residencia electoral no sólo se encuentra delimitada por el lugar donde se habita, sino también por el espacio o asiento donde el ciudadano ejerce su profesión, oficio o posee alguno de sus negocios o empleos; de manera que la residencia electoral de un ciudadano surge por la relación material que tiene con el municipio donde pretende ejercer el derecho, tal como lo señala el artículo 183 Ibidem”, así lo dice puntualmente la Resolución 4867 de 2019.
21. En el presente asunto es claro que quedó probado que los 955 votantes relacionados en el documento anexo se inscribieron para ejercer el derecho al voto de manera irregular en La Jagua del Pilar, La Guajira, por residir en municipio diferente al municipio quedando desvirtuada la residencia electoral de estos.
22. En este orden, ha dicho en sendas oportunidades el CNE, “la residencia electoral puede predicarse por la relación del votante con el lugar en el que: (i) habita, (ii) en el que de manera regular está de asiento, (iii) ejerce su profesión u oficio y/o (iv) en el que posee alguno de sus negocios o empleo”, todo ello, en tiempo presente

Rezan los citados artículos:

**“CONSTITUCIÓN NACIONAL: ARTICULO 316.** *En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.*

**“LEY 136 DE 1994. ARTÍCULO 183. Definición de residencia.** *Entiéndese (sic) por residencia para los efectos establecidos en el Artículo 316 de la Constitución Política, el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo. Ver el Concepto del Consejo de Estado 1222 de 1999”.*

**LEY 163 DE 1994. ARTÍCULO 4o. RESIDENCIA ELECTORAL .** *Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral.*

*Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio.*

*Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.*

*Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto número 2762 de 1991”.*

23. Más adelante continúa diciendo la misma Resolución 4867 de 2019, expresamente que

*“... Tal acto administrativo faculta a la Corporación para que efectúe un cotejo o cruce de bases de datos de distintas entidades públicas o privadas, con la finalidad de obtener los elementos de juicio necesarios que le permitan confirmar o desvirtuar, la residencia electoral de los ciudadanos, en tanto que **las bases de datos seleccionadas para efectuar tal cotejo o cruce, serán aquellas que otorguen información relativa a los ciudadanos, específicamente en lo que a la identificación de su lugar de residencia electoral se refiere** y el resultado de dichos cruces será el insumo principal que nutrirá las decisiones que sobre trashumancia electoral o inscripción irregular de cédulas adopte la Corporación...”*

24. De lo expuesto se colige que dentro del mismo expediente del Consejo Nacional Electoral se encuentra probado, no solo que el lugar de residencia de las 955 cédulas dejadas sin efecto la inscripción, no lo es el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, y además se pudo constatar cual es, con grado de certeza irrefutable, el municipio en el que tienen su asiento estos, por tal motivo no es de recibo que se mantengan estas cédulas inscritas en el municipio en el que se ha probado que fueron trasteados los votos, pues es un deber garantizar la genuina expresión de la voluntad popular de los asociados, como bien superior, objeto de protección a través de sendos tratados internacionales, debiendo hacer un efectivo control a la trashumancia electoral, acatando la orden emitida por el Consejo Nacional Electoral, que dispuso dejar sin efectos dichas inscripciones en el municipio de La Jagua del Pilar, y tomar las medidas necesarias y suficientes que garanticen que dichas cédulas queden inscritas en el lugar de residencia del implicado, y no otro.



25. Por lo anterior, debe cumplirse la orden emitida mediante Resolución 4867 de 2019 del CNE, sin otra consideración a la luz de la normatividad que rige la materia pues, en caso contrario, estaríamos bajo los mismos criterios de la trashumancia electoral o trasteo de votos, ampliamente prohibida por la constitución y las leyes; cualquier criterio que difiera con lo señalado en la Constitución, y las leyes 136 y 186, se trata de un criterio errado y caprichoso del funcionario de turno, que no está cimentado bajo bases legales ni constitucionales, pues la normativa exige que el lugar de votación esencialmente sea el de la residencia, la cual se fundamenta sobre la base de cuatro (4) pilares ya mencionadas, y no en concepto o condición diferente, que hacen que la decisión del CNE sea inane, violando el derecho al debido proceso, predicable de toda actuación judicial y administrativa, y la sentencia efectiva.
26. Las anteriores consideraciones ratifican que se torna inminente el perjuicio que se causaría para los comicios de la municipalidad para las elecciones 2023, de mantener incólume la inscripción en el censo del municipio de la Jagua del Pilar, La Guajira, de las 955 cédulas relacionadas en el anexo que acompañan la presente acción constitucional, objeto de declaratoria de trashumancia por el CNE mediante Resolución 4867 de 2019, pues estarían eligiendo alcalde municipal, ciudadanos que no residen en La Jagua del Pilar, limite al derecho a elegir, en tanto este se debe ejercer en el lugar de residencia, y de ser elegido, en tanto este está sujeto a que lo hagan quienes residen en el territorio en el que el candidato aspira a ocupar el cargo y no por personas ajenas a la municipalidad.
27. En el presente caso, el asunto se encuentra revestido de relevancia constitucional, pues se pretende la protección de un bien superior; como si fuera poco, no existe otra acción que evite o impida el daño que se ocasionaría de permitir que los 955 electores trashumantes inscritos en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, ejerzan el derecho al voto en este municipio de manera irregular, y que decidan irregularmente sobre la administración de la municipalidad, lo cual no se puede sanear ni aún con las acciones penales o de cualquier otra índole que se llegaren a accionar, de existir, puesto que ninguna de estas acciones están encaminadas a impedir que estos trashumantes ejerzan de manera irregular el derecho al voto para las próximas elecciones, aunque hayan sido inscritos de manera también irregular y no residan en el municipio, pues si bien pueden estar incurso en un delito penal, esto no impide que ejerzan el derecho al voto en un municipio al que no deben acudir por mandato constitucional, y de acuerdo con la decisión del CNE, ni aunque se llegaren a ejercer acciones penales en contra de los funcionarios, ni contra los inscritos irregularmente.
28. Es dable indicar además que la medida solicitada al despacho se torna inminente, urgente y es impostergable, dado que se avecinan las elecciones para el próximo 29 de octubre de 2023, para elegir a la autoridad local de entre los aspirantes asistiéndonos el derecho constitucional de elegir alcalde local en La Jagua del Pilar, solo por quienes residen en el municipio, y además existe una orden de autoridad que ordenó mediante Resolución 4867 de 2019, para efectos de la protección constitución al derecho a elegir (limitado por la misma constitución al lugar de residencia), y a ser elegido (limitado para los aspirantes por los ciudadanos que residen en el lugar para las elecciones locales), que de no cumplirse en su integridad, vulnera el derecho al debido proceso y a la sentencia

**efectiva, principio predicable también para las decisiones que resuelven un caso de fondo, proferidas en sede administrativa.**

### **PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL:**

Es menester precisar con grado de certeza que lo que se pretende es el cumplimiento efectivo de la Resolución No. 4867 de 2019, proferida por el Consejo Nacional Electoral en el marco del proceso breve y sumario de nulidad de la inscripción de cédulas en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, lo que hace procedente el amparo a los derechos constitucionales que por esta vía se reclama, del derecho al Debido Proceso, y a la Sentencia efectiva.

Así las cosas, traigo de presente que en Sentencia T-005 de 2015, la Honorable Corte Constitucional expresamente señaló que:

*“... 2.5.1. Procedencia de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de una sentencia judicial.*

*Uno de los pilares básicos de un Estado Social de Derecho es el acatamiento y cumplimiento oportuno de las sentencias judiciales por parte de los particulares y por supuesto, de las entidades públicas. Los derechos consagrados en los artículos 228 y 229 de la Constitución, además de garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia, así lo exigen, pues admitir lo contrario, además de comprometer los derechos señalados, se atentaría contra el deber consagrado en el inciso final del artículo 4º<sup>[14]</sup> de la Carta y el derecho al debido proceso (art. 29).*

*Respecto de la procedencia de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de las decisiones que finiquitan un proceso judicial, la Corte ha reconocido, a través de una amplia y constante línea jurisprudencial, que el mecanismo constitucional resulta procedente, de manera general, cuando se está en presencia de una obligación de hacer. El ejemplo característico de este tipo de obligación ocurre cuando la sentencia judicial ordena el reintegro de un trabajador.*

*Situación contraria ocurre cuando se encuentra incorporada una obligación de dar. La jurisprudencia constitucional ha afirmado que el ordenamiento jurídico contempla un mecanismo principal e idóneo para exigir el cumplimiento de este tipo de obligaciones como lo son los procesos ejecutivos. Al respecto, la Corte ha señalado “que el proceso ejecutivo tiene la virtualidad de obtener el forzoso cumplimiento de aquello que se quiere eludir, mediante la aplicación de medidas que, como el embargo y posterior remate de los bienes del deudor, están en manos del juez, quien las lleva adelante pese a la resistencia del demandado, en los casos y dentro de las reglas procesales pertinentes”<sup>[15]</sup>.*

*De esta manera, se puede concluir que el primer estudio que debe llevar a cabo el juez constitucional cuando resuelva una tutela cuya pretensión principal radique en el cumplimiento de una providencia judicial, es determinar el tipo de obligación que consagra la orden del fallo.*

*Ahora bien, lo anterior no significa que la acción de tutela siempre proceda para ordenar el cumplimiento de una sentencia que contiene una obligación de hacer; la naturaleza subsidiaria de la acción constitucional siempre prevalece y, por esa razón, además de la naturaleza de la obligación, debe constatarse que existe un riesgo cierto para los derechos fundamentales del accionante o el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable.*

*Aceptar una tesis distinta implicaría admitir que la tutela opera como un mecanismo ordinario dentro de los procesos judiciales, desnaturalizando así la acción. Este postulado cobra*

*mayor fuerza cuando la obligación de hacer que se pretende hacer cumplir tiene un carácter netamente monetario; en estos casos la Corte no puede admitir la procedencia automática de la acción de tutela, toda vez que hacerlo desnaturalizaría la acción. En consecuencia, al igual que en cualquier otra circunstancia puesta en conocimiento del juez constitucional, es menester realizar un estudio para determinar la real afectación de los derechos<sup>2</sup>.*

### **PRETENSIONES:**

Que se le dé cumplimiento íntegro a la Resolución No. 4867 de 2019 proferida por el Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que sean efectivamente eliminadas del censo electoral del municipio de La Jagua del Pilar, la inscripción irregular de las 2.137 cédulas inscritas irregularmente, entre las cuales deben quedar eliminadas del censo electoral las 955 cédulas relacionadas en el anexo adjunto, que hacen parte del *Anexo\_02\_LA GUAJIRA BE5F96C3* de dicha resolución, que dejó sin efectos la inscripción de irregular de las mismas por trashumancia en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, por las consideraciones expuesta.

### **PRUEBAS**

**DOCUMENTALES:** Allego para que sea tenida en cuenta como prueba:

- Derecho de petición presentado ante el CNE con Radicado **RNEC-E-2023-026906** con el detalle de las cédulas que de dicho anexo no fueron eliminadas del censo electoral de La Jagua del Pilar, La Guajira.
- Respuesta del CNE
- Pantallazo lugar de votación del suscrito.
- Copia Cédula Ciudadanía accionante
- Anexo *Anexo\_02\_LA GUAJIRA BE5F96C3* de la Resolución 4867 de 2019 CNE
- Resolución 4867 de 2019 del CNE.

**DE OFICIO:** Solicito se sirva ordenar al Consejo Nacional Electoral, allegue los antecedentes del proceso breve y sumario adelantado para la cancelación de las inscripciones irregulares en la Jagua del Pilar, La Guajira, por trashumancia electoral, terminado mediante Resolución No. 6049 de 2019, que resolvió el Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 4867 de 2019, ejecutoriada.

### **JURAMENTO:**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, juro bajo la gravedad del juramento, que no he presentado otra acción de tutela respecto de los mismos hechos y derechos.

Cordialmente,



**IVÁN FRANCISCO FUENTES PEÑALOZA**

C.C. No. 1136883859

T.P. No. 294147 del CSJ

---